

EDITORIAL

Más cerca de España

EXTREMADURA está desde ayer un poco más cerca de Madrid, que es tanto como decir más cerca del resto de España y del mundo. El ministro de Obras Públicas, José Borrel, inauguraba ayer dos tramos de autovía de la N-V, entre Trujillo y Miajadas uno y entre Mérida y Badajoz otro, que suponen más de 105 kilómetros. Si se tiene en cuenta que también ayer se inauguraba, en esta misma carretera, la variante de Valmojado, única interrupción que quedaba para la conversión total en autovía del tramo Naval Moral-Madrid, hemos de concluir que la distancia que separaba a Badajoz de Madrid se ha acortado considerablemente.

No le faltaba razón al presidente de la Junta al calificar de histórica la jornada: Extremadura cuenta ya con más de un centenar de kilómetros de autovía, que es tanto como decir de una vía de comunicación moderna, respuesta adecuada a las exigencias de infraestructura viaria cada día mayores que se plantean en los países desarrollados. Inauguración, por otra parte, que suscita mayores esperanzas y mejores perspectivas de cara al futuro, por cuanto, como señaló el ministro de Obras Públicas y Transportes, se ponía en marcha también "lo que vamos a construir". Y allí mismo anunciaba la inmediata contratación el próximo viernes de uno de los tramos restantes, y seguramente dentro de este mismo año, del siguiente, con lo que se completará la autovía Madrid-Badajoz. A partir de ahí, el enlace por autovía o autopista con las capitales y las más importantes ciudades de toda la CE es un hecho.

Bien puede hablarse, por tanto, de la historicidad de este 30 de noviembre del 92 y hasta nos gustaría ver en la obra inaugurada un símbolo de la incorporación de Extremadura a la modernidad y al futuro. No decimos que sea ni el único ni el primero. A nadie, creemos, se le ocurre negar cuanto se ha hecho hasta ahora ni ignorar los avances que ha experimentado Extremadura en la mejora de sus infraestructuras y servicios. Ni siquiera cuando se ponen sobre el tapete problemas o carencias que pueden seguir existiendo. O cuando se critican -con más o con menos razón- posibles fallos o pequeños defectos, inherentes a cualquier obra humana. Pero hablar de lo que falta, que nunca será negar lo que se ha hecho, ni siquiera tiene por qué ser tomado como crítica a los gobernantes; antes bien, podrá ser utilizado por estos como argumento de las demandas de la sociedad a la que sirven ante otras instancias superiores.

Extremadura debe sentirse satisfecha por ese centenar largo de kilómetros de autovía inaugurados ayer; sus gobernantes, también. Más aún: hay que reconocer que esta obra, que ha supuesto una inversión de casi 34.000 millones de pesetas, no se hubiera hecho nunca con criterios de pura rentabilidad: dicho de otro modo, no cabe creer que a ninguna empresa privada se le ocurriera nunca construir estos tramos como autopista para explotarlos comercialmente. Eso significa, según se apuntó ayer, que ha funcionado la solidaridad en beneficio de una región, Extremadura, que necesita ser apoyada para que pueda desarrollarse. Bien es verdad que ni el caso es único ni se pueden establecer paralelismos: el Estado redistribuye lo que percibe de los ciudadanos, prestando servicios y realizando inversiones allí donde son necesarias o convenientes, y esa es su manera de hacer efectiva la solidaridad; las empresas privadas realizan una inversión de su bolsillo para producir bienes o servicios, que otros adquirirán previo pago de su importe. En resumen: la inauguración de ayer evidencia algo que no debe admitir duda: que Extremadura también es España, esa España de la que ahora estamos algo más cerca.

HOJA DE CALENDARIO

El negro disecado

PEDRO VILLALAR

RELATABA ayer la prensa que una comisión del Centro Interamericano de Iniciativas Culturales, a cuyo frente se hallaba un médico de origen haitiano, ha visitado emocionadamente el Museo Darder de Banyoles -Gerona- para solicitar que el negro disecado que allí se exhibe sea retirado de la exposición y sepultado dignamente.

Tras los Juegos Olímpicos que levantaron una polémica internacional sobre este asunto, ahora ya sin flecos publicitarios continúa la lógica exigencia de que desaparezca esta exhibición degradante y clara-

mente racista. Pero nadie parece tomarse en serio el asunto. Antes al contrario, la insensibilidad general había echado en el olvido esta hiriente declaración táctica de que un negro es como un animal, que merece ser cazado y disecado para servir de trofeo. croata. Cultura se llama la figura.

Es penoso tener que decir todavía estas cosas. Y es lógico, completamente lógico, que hayamos de encarar aquí nuevos e inesperados problemas de racismo. ¿Cómo no va a tenerlos un país que muestra a los negros disecados en las vitrinas de sus museos?

Juan Guerra en el banquillo

ANTONIO PAPELL

AYER dio comienzo en Sevilla el primer juicio oral del largo recorrido procesal del 'caso Juan Guerra'. Todo indica -no parece necesario tener que repetirlo- que este complejo asunto es el producto de la picaresca de su principal protagonista, quien encumbrado súbitamente por causa de su apellido, explotó la familiaridad con el entonces vicepresidente del Gobierno en beneficio privado. El asunto, aunque con interés político innegable, no tendría sin embargo verdadera trascendencia pública si buena parte de estas 'gestiones' presuntamente ilegales, en las que parece haber existido tráfico de influencias, no hubieran sido realizadas desde un despacho oficial en la delegación del Gobierno en Sevilla. En todo caso, los jueces han decidido que quienes brindaron aquellas insólitas facilidades al supuesto facineroso -'asistente' de su hermano Alfonso- no deberán rendir cuentas ante la justicia. Extraña decisión que sin embargo hay que acatar.

La explosión del 'caso Juan Guerra', provocada por las ingenuas declaraciones de un alcalde andaluz, ha marcado un punto de inflexión en la política española. Hasta entonces corrían los rumores sobre comisiones ilegales -en toda las instancias de poder y no sólo en las controladas por socialistas- que servían para financiar a los partidos políticos y que con frecuencia debían quedarse en los bolsillos de los intermediarios; a partir de aquel momento la opinión pública,

francamente escandalizada, se dio cuenta de que la democracia también genera corrupción y de que poco se había hecho por evitarla. Y tras el 'caso Juan Guerra' han surgido los demás escándalos -y se han intuido otros todavía no destapados- que obligan a plantearse con rigor una regeneración de la vida pública desde el punto de vista de la transparencia económica.

González acaba de declarar a un periódico catalán que 'no hay una situación de corrupción grave, pero sí alarma social'. Infortunadamente, tal afirmación carece de sentido: si hay alarma social es que subjetivamente al menos la situación de corrupción es grave. Y con toda objetividad no se puede considerar intrascendente el hecho de que tanto el Partido Popular con el 'caso Naeiro' -la exculpación de los acusados por motivos de procedimiento no nos va a hacer olvidar el contenido de las famosas cintas no admitidas como prueba por el Tribunal- como el Partido Socialista con los 'casos Juan Guerra y Filesa' se hayan movido en los procélosos territorios de la financiación irregular. Tampoco parece razonable que González se lamenta de que estemos 'viviendo el fenómeno insólito de trasladar la confrontación política ordinaria que debe darse en el ámbito parlamentario a los juzgados', lo que le parece 'una politización de la justicia': lo que en realidad ocurre es lo contrario, una judicialización de la vida política por la sencilla razón de que algunos políticos han vulnerado

aparentemente el código penal. Por lo demás la única protección que encuentran los ciudadanos contra el abuso de los políticos corruptos es la judicial, por lo que resulta tranquilizador y no al contrario que semejantes escándalos estén sometidos a los tribunales.

González arremete también, probablemente con razón, contra 'los medios y profesionales que con apariencia de seriedad son absolutamente 'amarillos''. Por supuesto que hay buena y mala prensa, profesionales honrados y corruptos. Exactamente igual que ocurre entre la clase política. Pero tal evidencia no puede servir como coartada para disimular deslices propios o ajenos, ni mucho menos para justificar la afirmación de que todas las irregularidades de las que el 'caso Juan Guerra' es paradigma destacado son una pura invención maliciosa de los opositores políticos.

Antes al contrario, la ciudadanía desearía ver un acto de contrición de la clase política previo a un gran consenso para erradicar de una vez no sólo tales abusos, sino las causas que los hacen posibles. Contra la corrupción no se lucha matando al mensajero ni descalificando a quien denuncia, sino expulsando de los partidos políticos de modo fulminante a quien haya mantenido una conducta irregular en lo económico; estableciendo fórmulas más objetivas de contratación pública; haciendo ardoroso proselitismo de la debida honradez.

EL ANFITEATRO

ETA vuelve a matar

La explosión de un coche bomba provocó ayer la muerte de un subteniente de la Guardia Civil, heridas graves a un cabo y de menor importancia a varios civiles más en el madrileño barrio de Moratalaz, junto a unas viviendas militares. Sólo la organización terrorista ETA puede estar detrás de esta nueva salvajada que ha causado una tragedia perfectamente inútil: nadie en su sano juicio puede creer a estas alturas que el terrorismo es capaz de doblegar al Estado de Derecho. Por el contrario, semejante atrocidad dificulta la solución de los presos de ETA, algo que probablemente es lo que está buscando la actual dirección del extremismo radical vasco. Cuando la ceguera política y la obcecación ideológica alcanzan estas cotas rayanas con el absurdo, ya no vale siquiera la pena hablar de solución política para el problema etarra: quienes todavía quedan en libertad para tramitar y cometer atentados son simples desequilibrados que apenas si merecen atención policial. Cualquier otro discurso carece de sentido.

Primer juicio contra Juan Guerra

Ayer Juan Guerra se sentó en el banquillo por primera vez, acusado de delitos fiscales y de la compra irregular de una propiedad a una empresa pública. El fiscal pide para el hermano del ex vicepresidente Alfonso Guerra nueve años de cárcel más que la acusación privada. Pero ahí no terminará el calvario judicial de quien se ha convertido en el símbolo vivo de la picaresca en nuestro país: no menos de nueve procesos más le aguar-

dan, de los que al menos seis se verán en el plazo de un año: la panoplia de irregularidades que se le imputan es muy amplia: desde desviar enfermos de un hospital público a otro privado, hasta el tráfico de influencias en distintas versiones, pasando por la utilización de un despacho público en beneficio propio. Naturalmente esta secuencia tiene un claro significado político que lesionará gravemente al Partido Socialista, por más que quienes facilitaron el tal despacho al hermanísimo no vayan a ser juzgados luego de una extraña decisión judicial en este sentido.

Los sindicatos amenazan

Ayer los secretarios generales de los seis principales sindicatos de este país -UGT, CC.OO., USO, ELA-STV, Intersindical Galega y CGT- se reunieron para intentar impedir que el Gobierno adopte la decisión de facilitar los despidos colectivos, suprimiendo las trabas administrativas que actualmente los dificultan. Aunque nadie quiso hablar de amenaza de huelga general, sí anunciaron que tomarían medidas de movilización extrema si tal proyecto, sugerido incluso por González en su entrevista del domingo a "El Periódico", de Cataluña, se consuma. Para encuadrar esta actitud hay que saber que España es el único país de la Comunidad Europea que aún mantiene estas trabas a la flexibilidad en el empleo. Y habría que preguntar a los sindicalistas qué debe hacer una empresa que con la caída de la demanda no pueda sostener a toda su plantilla. ¿Debe cerrar definitivamente o ha de hacer una regulación de empleo?